

Extrait du El Correo

<http://elcorreo.eu.org/Espana-manda-tanques-a-Colombia-y-cierra-fronteras-a-los-refugiados-Comunicado-de-la-Comision-Espanola-de-Ayuda-al-Refugiado>

España manda tanques a Colombia y cierra fronteras a los refugiados. Comunicado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Date de mise en ligne : Jeudi 1er mars 2004

- Empire et Résistance - Union Européenne - Espagne -

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

El Gobierno español contribuye al recrudecimiento de la guerra en Colombia y a incrementar la represión y violencia que sufre la población civil

Por [Rebelión](#), 27 de febrero del 2004

CEAR recibe con extrema alarma la noticia de que España suministrará a Colombia varios carros de combate y obuses valorados en más de seis millones de dólares, convirtiéndose en el segundo país que le presta ayuda militar, por detrás de Estados Unidos. Como organización que da asistencia a los refugiados en España y desde nuestro compromiso con los derechos humanos, no entendemos cómo el Gobierno español accede a prestar apoyo armamentístico al presidente Uribe, contribuyendo al recrudecimiento de la guerra y a incrementar la espiral de represión y violencia que atenaza a la población civil.

La lucha contra el terrorismo no es un argumento con el que se pueda pasar por encima de la escalofriante realidad colombiana. Según estudios de organizaciones no gubernamentales (ONG), casi tres millones de colombianos han sido víctimas de desplazamiento forzado desde 1985 como efecto del conflicto armado, en el que están implicados grupos guerrilleros, paramilitares de ultraderecha y la fuerza pública. Con esta decisión, España está armando a un ejército señalado por las organizaciones humanitarias y organismos internacionales como uno de los principales agentes responsables de violaciones de los derechos humanos. Un ejército que, además, se encuentra estrechamente vinculado con los grupos paramilitares, a quienes el Gobierno garantiza total impunidad frente a sus crímenes, en virtud del proyecto de ley de "alternatividad penal", además de reconocerles la apropiación de tierras obtenidas mediante el desplazamiento forzoso de poblaciones y la práctica del terror.

El Gobierno español se alinea con las tesis de Uribe al repetir que en Colombia no hay conflicto armado sino "una lucha del pueblo contra bandidos y terroristas", lo que supone no reconocer el principio de distinción de las partes que garantizaría el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Curiosamente, este discurso va unido a un ataque del presidente Uribe contra los defensores de los derechos humanos, a quienes acusa en sus discursos de "defensores del terrorismo", cuando constituyen una de las principales víctimas de la violencia.

CEAR hace suya la reivindicación de las organizaciones de derechos humanos en Colombia, así como de la Federación Internacional de Derechos Humanos, al reivindicar una política de seguridad que no vaya en detrimento de los derechos y libertades fundamentales y el fin de la estrategia militar para buscar vías dialogadas de solución y una paz con justicia social que acabe con cinco décadas de guerra civil. La llamada política de seguridad democrática del presidente Uribe, que fue rechazada masivamente por el 75% de los electores colombianos en el referéndum del pasado 25 de octubre, y con la que supuestamente se trata de combatir el terrorismo, supone una extensión del conflicto armado a la población civil, a quien se delegan funciones de seguridad que son propias del Estado. Dicha política se tradujo el pasado año en casi dos mil detenciones arbitrarias, situación que se agrava con el establecimiento del Estatuto Antiterrorista (consignado en el Acto legislativo 223 de 2003) que permite capturas sin orden judicial, restringe la libre circulación de personas y otorga a los militares facultades de policía judicial.

El balance de esta "política de seguridad" no puede ser más desolador : durante el mandato del presidente Uribe van asesinados 13 defensores de los derechos humanos, 72 sindicalistas y más de 50 líderes comunitarios y campesinos. Entre junio de 2002 y junio de 2003 se produjeron más de diecinueve asesinatos diarios en Colombia. La violencia se ejerce cotidiana e impunemente contra los defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales, campesinos, indígenas y periodistas, lo que empuja a miles de personas a huir del país cada año.

El presidente Aznar, conociendo esta realidad, no solamente ha decidido desoír a la Federación Internacional de Derechos Humanos cuando recientemente recomendaba al Parlamento Europeo que no contribuyera a la estrategia de guerra del presidente Uribe, con motivo de su gira europea. Además de avalar la política del gobierno colombiano, con lo que implica de impunidad, de recorte de derechos y libertades, de extensión del conflicto a la población civil y de ataques a los defensores de derechos humanos, España opta por alimentar el conflicto armando a una de las partes, ciega y sorda ante el clamor internacional que exige el fin de la guerra civil que ha convertido a Colombia en uno de los principales países emisores de refugiados del mundo.

Solamente en el año 2003 buscaron protección en terceros países 6.808 colombianos, de los cuales 524 llegaron a nuestras fronteras. No podemos dejar de señalar que el envío de armas a Colombia por parte del Gobierno español coincide con una política de cierre de fronteras y de exigencia de visado de entrada a los ciudadanos colombianos que obstaculiza enormemente su llegada y la posibilidad de solicitar asilo en nuestro país, inadmitiendo a trámite una gran cantidad de solicitudes bajo el argumento de que Colombia es un "país seguro".

CEAR denuncia esta política inmoral, irresponsable y contraria al más elemental respeto a los valores de la paz y los derechos humanos y exige al Gobierno español que rectifique y prohíba la venta de armas a Colombia, así como al resto de países en los que existe un conflicto armado o que sufren violaciones de derechos humanos, y que garantice el acceso al procedimiento de asilo y una adecuada protección a las personas que llegan a nuestro país huyendo de la persecución en Colombia, en cumplimiento de los acuerdos y pactos internacionales suscritos por España.